Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a seis de noviembre de dos mil veinticuatro.

**VISTO** el expediente formado con motivo del recurso de revisión **05169/INFOEM/IP/RR/2024**, interpuesto por **XXXXX XXXX XXXXXXX,** en lo sucesivola parte **Recurrente,** en contra de la respuesta a la solicitud de información con número de folio **00222/ZINACANT/IP/2024,** por parte del **Ayuntamiento de Zinacantepec,** en lo sucesivo el **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

**I. A N T E C E D E N T E S**

**1. Solicitud de acceso a la información.** El **once de julio de dos mil veinticuatro,** la parte **Recurrente** presentó, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente el **SAIMEX,** ante el **Sujeto Obligado**, la solicitud de acceso a la información pública, mediante la cual requirió la información siguiente:

*“Solicito de manera respetuosa la siguiente información: -Acciones que ha realizado el Departamento de "SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO", para controlar el flujo vial en la Avenida Adolfo Lopez Mateos 1046 Carretera Almoloya y Lopez Mateos San Luis Mextepec, 51355 San Luis Mextepec, Méx. -Cantidad y tipos de accidentes vehiculares que han sucedido en la Avenida Adolfo Lopez Mateos 1046 Carretera Almoloya y Lopez Mateos San Luis Mextepec, 51355 San Luis Mextepec, Méx, del 01 de enero de 2024 al 11 de julio de 2024. -Del 01 de enero al 11 de julio de 2024, solicito respetuosamente la cantidad de multas que han impuesto a los CONDUCTORES DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS derivado de no obedecer la señal de alto, siga o preventiva cuando así lo indique el semáforo, así como la sanción económica que se implementó. -Protocolo o actividades que han implementado para regular el correcto funcionamiento de la base de taxis que se encuentra en la Avenida Adolfo Lopez Mateos 1046 Carretera Almoloya y Lopez Mateos San Luis Mextepec, 51355 San Luis Mextepec, Méx. Gracias!****”*** *(sic)*

**Modalidad de Entrega:** A través del SAIMEX.

**2. Prórroga.** El **quince de agosto de dos mil veinticuatro,** el **Sujeto Obligado** notificó a la persona solicitante la prórroga para dar respuesta a la solicitud**,** medularmente en los siguientes términos:

*“Con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se le hace de su conocimiento que el plazo de 15 días hábiles para atender su solicitud de información ha sido prorrogado por 7 días en virtud de las siguientes razones:*

*Con fundamento en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios se aprueba prórroga solicitada con la finalidad de dar cabal cumplimiento a su requerimiento.” (sic)*

Como refiere el **Sujeto Obligado** la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, contempla la potestad de ampliar el plazo hasta por siete días, en términos del párrafo segundo del artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas para hacerlo, y que estas sean aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución; en el caso particular que nos ocupa y derivado de las constancias que obran en el expediente, se advierte que no se observaron las formalidades que establece la Ley de la materia, pues no se anexó la resolución mediante la cual el Comité de Transparencia aprobó la ampliación del plazo.

**3. Respuesta.** El **veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro,** el **Sujeto Obligado** envió su respuesta a la solicitud de acceso a la información a través de SAIMEX, sustancialmente en los términos siguientes:

*“…En apego a lo establecido su solicitud fue analizada y turnada al área poseedora de la información, por lo que con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, donde se establece que, “Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se le requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre. La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones”. Por lo anterior, remito la respuesta proporcionada por el área competente...” (sic)*

El **Sujeto Obligado** adjuntó lo siguiente:

- Oficio número ZIN/DSPyT/2102/2024, del dieciséis de septiembre de dos mil veinticuatro, mediante el cual el Director de Seguridad Pública y Tránsito manifestó lo siguiente en atención a la solicitud:

* En horarios considerados con afluencia vehicular, se hacen recorridos de seguridad vial, con la finalidad de verificar que los semáforos y señalamientos de tránsito sean respetados por los conductores y en caso contrario imponer la sanción correspondiente conforme al Reglamento de Tránsito vigente.
* La Dirección de Seguridad Publica no lleva a cabo un conteo estadístico de accidentes vehiculares.

De conformidad con el artículo 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito es incompetente, toda vez que cualquier información relativa a la regulación de establecimientos de negocio, le corresponde a la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad.

* Se llevaron a cabo en San Luis Mextepec, 15 infracciones por no respetar el semáforo en rojo, por 20 UMAS cada una, conforme a los artículos 57 y 59 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, vigente.
* De conformidad con el artículo 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito es incompetente, toda vez que cualquier información relativa a la regulación de establecimientos de negocio, le corresponde a la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad.

- Oficio número ZIN/SCA/0911/2024, del diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, mediante el cual el Secretario del Ayuntamiento manifestó lo siguiente en atención a la solicitud:

* El Juzgado Cívico no realiza acciones para controlar el flujo vial en ninguna de las avenidas del municipio, siendo responsabilidad de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito.
* El Juzgado Cívico se encarga de recibir los hechos de tránsito que son puestos a disposición del primer respondiente en donde no fue posible que llegaran a un acuerdo en el lugar del accidente, razón por la que no está en posibilidades de dar la cantidad y tipos de accidentes atendidos por los elementos de tránsito ya que aproximadamente de cada 50 accidentes mensuales que atienden los oficiales solo se presentan al Juzgado Cívico un promedio del 10%, correspondiéndole a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito dar la estadística de la cantidad y tipos de accidentes atendidos.
* El Juzgado Cívico dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento no impone multas a los conductores de los diferentes tipos de vehículos que circulan en el municipio, derivadas por no obedecer la señal de alto, siga o preventiva cuando así lo indica el semáforo por lo que no está en posibilidades de poder informar la sanción económica que se implementa correspondiendo a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito aplicarlas.
* El Juzgado Cívico NO es competente para implementar el correcto funcionamiento de ninguna de las bases de los sitios que se encuentran dentro del territorio municipal, debiendo ser esta responsabilidad de la Dirección de Movilidad en coadyuvancia con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, y la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México.

- Oficio número ZIN/DDMyM/2024, del veintidós de agosto de dos mil veinticuatro, mediante el cual la Directora de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, respecto al protocolo o actividades que se han implementado para regular el correcto funcionamiento de la base de taxis, manifestó que no contaba con acceso a dicha información, ya que es competencia de la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

**4. Interposición del recurso de revisión.** Inconforme con los términos de la respuesta emitida por parte del **Sujeto Obligado**, el **veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro,** la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión a través de **SAIMEX,** en donde se manifestó de la siguiente manera:

**Acto impugnado:**

*“OFICIOS REMITIDOS VÍA SAIMEX POR LA TITULAR DE TRANSAPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE ZINCANTEPEC.” (sic)*

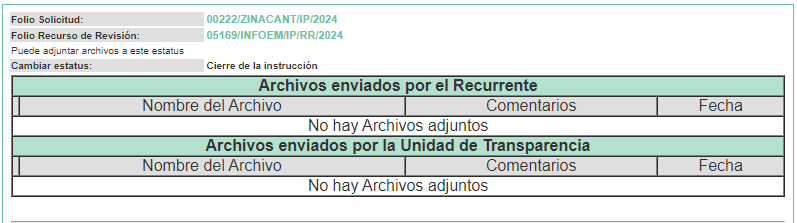
**Y, Razones o motivos de inconformidad**:

*“• H. Instituto de Transparencia, por medio del presente, me permito inconformarme con la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Zinacantepec, toda vez que es inaceptable la respuesta que emiten, sobre todo considerado la prórroga que me fue notificada en fecha 15 de agosto del año en curso a través de la página web del SAIMEX, mediante la cual se detectan irregularidades en la autorización de prórroga para dar atención a mi solicitud, toda vez que no adjuntaron acta mediante la cual el Comité de Transparencia aprobó dicha prorroga, aun cuando la propia ley de Transparencia Estatal, lo prevé en su artículo 53, fracción II, además fueron omisos en dar las razones fundadas y motivadas por las cuales aprobaron los 7 días para dar atención a mi solicitud, aun cuando así lo prevé la ley en comento en su artículo 163, segundo párrafo. • Por cuanto hace al requerimiento “Cantidad y tipos de accidentes vehiculares que han sucedido en la Avenida Adolfo Lopez Mateos 1046 Carretera Almoloya y Lopez Mateos San Luis Mextepec, 51355 San Luis Mextepec, Méx, del 01 de enero de 2024 al 11 de julio de 2024.” y a las respuestas “de conformidad con el artículo 167 de la Ley de Transparencia y Acceso alaInformación Pública del Estado de México y Municipios vigente, la Dirección de Seguridad Públicay Tránsito declara incompetencia para atenderlo, toda vez que cualquier información relativa a accidentes vehiculares, le corresponde a Hechos de Transito.”, así como “informo que la Dirección de Seguridad Publica a mi cargo, no lleva acabo un conteo estadístico de accidentes vehiculares”, mi inconformidad es respecto a que no es clara, toda vez que refieren dos respuestas que llevan el mismo número de oficio 2104, sin embargo, son contradictoras, toda vez que en una se declara incompetente la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, y en otra mencionan que no llevan un conteo estadístico, aunado a que el Lic. Ernesto Palma Mejía, refiere que corresponde a la propia Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, por lo que afirman que es información que si deberían poseer. Por lo que, en este sentido, tuve que hacer el análisis de los oficios que envío la C. Brenda Selene Hernández López, porque ella no fue capaz de darme una respuesta certera y concreta, y lo más sencillo fue remitir los oficios de los hoy involucrados en dar respuesta a mi solicitud inicial, por lo que considero que la Titular de Transparencia no respeto los principios de simplicidad, rapidez, auxilio y orientación a los particulares del procedimiento de acceso a la información. • Por cuanto hace al requerimiento “Protocolo o actividades que han implementado para regular el correcto funcionamiento de la base de taxis que se encuentra en la Avenida Adolfo Lopez Mateos 1046 Carretera Almoloya y Lopez Mateos San Luis Mextepec, 51355 San Luis Mextepec, Méx.” y a la respuesta emitida por la Mtra. Patricia Luna Delgado, de fecha 22 de agosto, mediante la cual se declara incompetente y refiere que corresponde a la Secretaría de Movilidad, es increíble que con los 22 días que tuvo la Unidad de Transparencia, esta sea la respuesta, desde que recibió la respuesta del Comisario Hecto Hugo Osorno Reyes, mismo que en fecha 16 de julio informó la incompetencia para atender el requerimiento, es así que al transcurrir este plazo de 22 días y declarando incompetencia a mi requerimiento, corresponde al Ayuntamiento de Zinacantepec, realizar las gestiones necesarias para canalizar mi requerimiento a la Secretaría de Movilidad, lo anterior de conformidad al artículo 167, párrafo tercero de la Ley Estatal de Transparencia. Por lo que, derivado de lo anterior, solicito tenga a bien analizar la respuesta emitida por el Ayuntamiento de Zinacantepec, y resolver conforme a Derecho.” (sic)*

**5. Turno.** De conformidad con el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el presente recurso de revisión se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la Comisionada **Guadalupe Ramírez Peña,** a efecto de que analizara sobre su admisión o su desechamiento.

**6. Admisión del Recurso de revisión.** El **treinta de agosto de dos mil veinticuatro,** este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **Sujeto Obligado** presentara su informe justificado.

**7. Manifestaciones.** De constancias del expediente electrónico del SAIMEX, se observa que el **Sujeto Obligado** fue omiso en rendir su informe justificado; así como, la parte **Recurrente** fue omisa en hacer valer manifestaciones o rendir alegatos que conforme a derecho resultaran procedentes, como se muestra:



**8. Cierre de instrucción.** Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes para realizar sus manifestaciones y no habiendo documentos que integrar al expediente, el **dos de octubre de dos mil veinticuatro**, la Comisionada Ponente determinó el cierre de instrucción en términos de la fracción VI del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**9. Ampliación del término para resolver**. El **diecisiete de octubre de dos mil veinticuatro**, se amplió el término para resolver el recurso de revisión en términos del artículo 181 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**II. C O N S I D E R A N D O S**

**Primero. Competencia.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo quinto, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**Segundo. Oportunidad y Procedibilidad del Recurso de Revisión**. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previstos en los artículos 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que el **Sujeto Obligado** remitió la respuesta a la solicitud de información el día **veintiséis de agosto de dos mil veinticuatro,** mientras que el recurso de revisión interpuesto por la parte **Recurrente, se tuvo por presentado el día veintisiete de agosto de dos mil veinticuatro**, esto es al siguiente día hábil posterior en que tuvo conocimiento de la respuesta impugnada. En este sentido, se concluye que el presente recurso de revisión se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en las disposiciones legales referidas.

Al mismo tiempo, por cuanto hace a la procedibilidad del recurso de revisión, una vez realizado el análisis de los formatos de interposición del recurso, se concluye la acreditación plena de los elementos formales precisados por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en atención a que fue presentado mediante el formato visible en el SAIMEX.

Finalmente, se advierte que resulta procedente la interposición del recurso, según lo manifestado por la parte **Recurrente** en sus motivos de inconformidad, de acuerdo al artículo 179, fracciones IV y V del ordenamiento legal citado, que a la letra dice:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

***…***

***IV****. La declaración de incompetencia por el sujeto obligado;*

***V****. La entrega de información incompleta;*

**Tercero. Materia de la revisión.** De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente electrónico se advierte, que el tema sobre el que este Organismo Garante de Transparencia y Acceso a la Información se pronunciará será: **verificar si la información proporcionada por el Sujeto Obligado es adecuada y suficiente para satisfacer el derecho de acceso a la información pública** de la parte **Recurrente**, o en su defecto, en caso de ser procedente, ordenar la entrega de información.

**Cuarto. Estudio del asunto.** En primer lugar, es conveniente mencionar que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se trascribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4****. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.”*

Esto es, que los Sujetos Obligados tiene la obligación o deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obren en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dice:

***“Artículo 12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”***

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular y practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados solo se concretaran a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentran, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio 03/17, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que por rubro y texto, dispone lo siguiente:

*“****No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.” (Sic)*

En esa tesitura, el artículo 24 en su último párrafo de la Ley de la Materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.

En conclusión, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…”*

Es aplicable, el Criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

Lo anterior, siempre y cuando no se trate de información clasificada como reservada o confidencial, cuya difusión pueda lesionar el interés jurídicamente protegido por la Ley, producir un daño mayor que el interés de conocerse, o bien, generar un daño en los derechos de las personas, debiendo tener audacia los Sujetos Obligados para cuidar esta información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita el servidor público habilitado de cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En el mismo tenor, los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establecen que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por las razones previstas en la Constitución Federal por interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes de la materia.

Ahora bien, del análisis de la solicitud de información, motivo del recurso de revisión que ahora se resuelve, se advierte que la parte **Recurrente** requirió al **Sujeto Obligado** le proporcione, información consistente en lo siguiente:

1. Acciones realizadas por el Departamento de Seguridad Pública y Tránsito, para controlar el flujo vial en la Avenida Adolfo López Mateos 1046, Carretera Almoloya y López Mateos, San Luis Mextepec, 51355, San Luis Mextepec, México.

2. La cantidad y tipos de accidentes vehiculares ocurridos en la Avenida Adolfo López Mateos 1046, Carretera Almoloya y López Mateos, San Luis Mextepec, 51355, San Luis Mextepec, México, del 01 de enero al 11 de julio de 2024.

3. La cantidad de multas que se impusieron a los conductores de todo tipo de vehículos derivado de no obedecer la señal de alto, siga o preventiva cuando así lo indique el semáforo, así como la sanción económica que se implementó, del 01 de enero al 11 de julio de 2024.

4. El protocolo o actividades implementadas para regular el correcto funcionamiento de la base de taxis que se encuentra en la Avenida Adolfo López Mateos 1046, Carretera Almoloya y López Mateos, San Luis Mextepec, 51355, San Luis Mextepec, México.

En respuesta, el **Sujeto Obligado,** por conducto de la Unidad de Transparencia hizo del conocimiento de la persona solicitante la respuesta proporcionada por los servidores públicos habilitados de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, la Secretaría del Ayuntamiento y la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, en los siguientes términos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dirección de Seguridad Pública y Tránsito** | **Secretaría del Ayuntamiento** | **Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad** |
| **Punto 1.** En horarios considerados con afluencia vehicular, se hacen recorridos de seguridad vial, con la finalidad de verificar que los semáforos y señalamientos de transito sean respetados por los conductores y en caso contrario imponer la sanción correspondiente conforme al Reglamento de Tránsito vigente. | **Punto 1.** El Juzgado Cívico no realiza acciones para controlar el flujo vial en ninguna de las avenidas del municipio, siendo responsabilidad de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito. | ---------- |
| **Punto 2.** La Dirección de Seguridad Publica no lleva a cabo un conteo estadístico de accidentes vehiculares.  De conformidad con el artículo 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito declara incompetencia para atenderlo, toda vez que cualquier información relativa a accidentes vehiculares, le corresponde a Hechos de Transito. | **Punto 2.** El Juzgado Cívico se encarga de recibir los hechos de tránsito que son puestos a disposición del primer respondiente en donde no fue posible que llegaran a un acuerdo en el lugar del accidente, razón por la que no está en posibilidades de dar la cantidad y tipos de accidentes atendidos por los elementos de tránsito ya que aproximadamente de cada 50 accidentes mensuales que atienden los oficiales solo se presentan al Juzgado Cívico un promedio del 10%, correspondiéndole a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito dar la estadística de la cantidad y tipos de accidentes atendidos. | ---------- |
| **Punto 3.** Se llevaron a cabo en San Luis Mextepec, 15 infracciones por no respetar el semáforo en rojo, por 20 UMAS cada una, conforme a los artículos 57 y 59 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, vigente. | **Punto 3.** El Juzgado Cívico dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento no impone multas a los conductores de los diferentes tipos de vehículos que circulan en el municipio, derivadas por no obedecer la señal de alto, siga o preventiva cuando así lo indica el semáforo por lo que no está en posibilidades de poder informar la sanción económica que se implementa correspondiendo a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito aplicarlas. | ---------- |
| **Punto 4.** De conformidad con el artículo 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito es incompetente, toda vez que cualquier información relativa a la regulación de establecimientos de negocio, le corresponde a la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad. | **Punto 4.** El Juzgado Cívico NO es competente para implementar el correcto funcionamiento de ninguna de las bases de los sitios que se encuentran dentro del territorio municipal, debiendo ser esta responsabilidad de la Dirección de Movilidad en coadyuvancia con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, y la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México. | **Punto 4.** No cuenta con acceso a dicha información, ya que es competencia de la Secretaría de Movilidad del Estado de México. |

Al no estar conforme con los términos de la respuesta emitida, la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión que se resuelve, donde señaló como motivo de inconformidad, que la respuesta proporcionada al **punto 2** donde se solicitó la cantidad y tipos de accidentes vehiculares sucedidos en la Avenida Adolfo López Mateos 1046, no es clara, al haberse proporcionado un oficio del Director de Seguridad Pública y Tránsito con el mismo número, cuyo contenido es contradictorio, al declarar la incompetencia en uno, y en otro que la Dirección no lleva un conteo estadístico, mientras que la Secretaría del Ayuntamiento refirió que se trataba información que correspondía a la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito; por otro lado, respecto al **punto 4** donde se solicitó el protocolo o actividades implementadas para regular el correcto funcionamiento de la base de taxis que se encuentra en la Avenida Adolfo López Mateos 1046, la Directora de Desarrollo Metropolitano y Movilidad y el Director de Seguridad Pública y Tránsito declararon la incompetencia al día 22 de haberse presentado la solicitud, sin embargo, de conformidad con el artículo 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, considera que el **Sujeto Obligado** debió realizar las gestiones necesarias para canalizar el requerimiento ante la Secretaría de Movilidad.

En este sentido, no pasa inadvertido para este Organismo Garante que los motivos de inconformidad aducidos, no versan sobre la totalidad de la información proporcionada por el **Sujeto Obligado,** pues la parte **Recurrente** no manifestó, inconformidad respecto de la respuesta proporcionada a los puntos 1 y 3 de la solicitud.

En este orden de ideas, la parte de la respuesta que no fue impugnada debe declararse consentida, toda vez que, al no haber realizado manifestaciones de inconformidad al respecto, no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado, ya que, en el caso concreto se infiere que la información proporcionada por el **Sujeto Obligado**, satisface la solicitud presentada, respecto de los requerimientos que no fueron combatidos.

Lo anterior es así, debido a que cuando la parte **Recurrente** impugna la respuesta del **Sujeto Obligado**, y éste no expresa Razón o Motivo de Inconformidad en contra de todos los rubros solicitados, dichos rubros deben declararse atendidos, pues se entiende que la parte Recurrente ésta conforme con la información entregada al no contravenir la misma. Sirve de Apoyo a lo anterior, por analogía la Tesis Jurisprudencial Número 3ª./J.7/91, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 174,177, que establece lo siguiente:

***“REVISIÓN EN AMPARO. LOS RESOLUTIVOS NO COMBATIDOS DEBEN DECLARARSE FIRMES.*** *Cuando algún resolutivo de la sentencia impugnada afecta a la recurrente, y ésta no expresa agravio en contra de las consideraciones que le sirven de base, dicho resolutivo debe declararse firme. Esto es, en el caso referido, no obstante que la materia de la revisión comprende a todos los resolutivos que afectan a la recurrente, deben declararse firmes aquéllos en contra de los cuales no se formuló agravio y dicha declaración de firmeza debe reflejarse en la parte considerativa y en los resolutivos debe confirmarse la sentencia recurrida en la parte correspondiente.”*

Consecuentemente, se insiste, ante la falta de impugnación eficaz, la respuesta entregada debe declararse consentida por persona solicitante.

Sirve de sustento lo plasmado en el Criterio de interpretación con clave de control SO/001/2020, emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales, INAI, que lleva por rubro y texto, lo siguiente:

*“****Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis.*** *Si en su recurso de revisión, la persona recurrente no expresó inconformidad alguna con ciertas partes de la respuesta otorgada, se entienden tácitamente consentidas, por ende, no deben formar parte del estudio de fondo de la resolución que emite el Instituto.”*

Asimismo, resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

Cabe señalar además, que de la lectura de los motivos de inconformidad se advirtió que la parte **Recurrente** realizó diversos planteamientos subjetivos, tales como “*ella no fue capaz de darme una respuesta certera y concreta, y lo más sencillo fue remitir los oficios de los hoy involucrados en dar respuesta a mi solicitud inicial, por lo que considero que la Titular de Transparencia no respeto los principios de simplicidad, rapidez, auxilio y orientación a los particulares del procedimiento de acceso a la información*” (sic), ante lo cual se puntualiza que el Derecho al acceso a la información pública constituye una prerrogativa para acceder a documentos o registros de información pública generada o en posesión de los Sujetos Obligados, motivo por el cual, este Organismo Garante precisa que dichas manifestaciones no son susceptibles de ser tomadas en consideración en la resolución del presente asunto, toda vez que no constituyen el ejercicio de un Derecho de acceso a la información pública, sino más bien el ejercicio de un Derecho de expresión, cuya finalidad consiste en contextualizar sus motivos de inconformidad. En este sentido, se trata de manifestaciones sobre las cuales este Instituto no está facultado para pronunciarse.

De igual forma alegó irregularidades respecto de la notificación de la prórroga para dar respuesta a la solicitud de información, donde señaló que el **Sujeto Obligado** no adjuntó el acta mediante la cual el Comité de Transparencia aprobó dicha prorroga, así como tampoco dio las razones fundadas y motivadas por las cuales se aprobó la ampliación del plazo para dar atención a la solicitud, siendo necesario apuntar que de conformidad con el artículo 163 de la Ley de Transparencia local, la prórroga debe darse en los siguientes términos:

*“****Artículo 163.*** *La Unidad de Transparencia deberá notificar la respuesta a la solicitud al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla. Excepcionalmente,* ***el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por siete días hábiles más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante****, antes de su vencimiento. No podrán invocarse como causales de ampliación del plazo motivos que supongan negligencia o descuido del sujeto obligado en el desahogo de la solicitud.” (Sic)*

De manera que dentro del trámite a la solicitud de información, se prevé que, de ser el caso en el que se requiera ampliar el plazo, deberán existir razones fundadas y motivadas, las cuales serán asentadas en una resolución emitida por el Comité de Transparencia y posteriormente este documento se notificará al solicitante antes del vencimiento del plazo, situación que no aconteció en el caso particular y es por ello que la parte **Recurrente** argumenta esta circunstancia al momento de la interposición de los Recursos de Revisión, no obstante, es de señalar que el Recurso de Revisión no es el medio para subsanar faltas u omisiones procesales, por lo que dicha manifestación no encuadra en algún supuesto de procedencia establecido en el artículo 179 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinándose improcedente su estudio.

Y, si bien la falta de la tramitación el acuerdo de prórroga resulta ser una inconsistencia procesal y ello no impide que se sustancie el medio de impugnación, se insta al **Sujeto Obligado** a desarrollar, en lo subsecuente, y con mayor diligencia el Procedimiento de Acceso a la Información Pública, entendido como la garantía primaria del derecho en cuestión, que se rige por los principios de simplicidad, rapidez gratuidad del procedimiento, auxilio y orientación a las personas solicitantes.

Continuando con el análisis, las partes fueron omisas durante la etapa de manifestaciones, en remitir cualquier elemento que a su derecho conviniera, por lo tanto, se tiene por precluído su derecho para tal efecto y se procede a emitir la resolución que conforme a derecho corresponda.

Una vez establecidas las posturas de las partes, se procede al análisis de los requerimientos de información, así como la información proporcionada por el **Sujeto Obligado,** en contraposición con el motivo de inconformidad alegado por la parte **Recurrente,** con la finalidad de determinar si el Derecho de acceso de esta se satisfizo, o, en su defecto, ordenar el soporte documental correspondiente, en caso de ser procedente.

Ahora bien, en principio es de recordar que de acuerdo con lo establecido en los artículos 53, fracción IV y 162 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, las Unidades de Transparencia deben garantizar que las solicitudes de acceso a la información se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla -de acuerdo a las facultades, competencias y funciones-, con el objeto de que dichas áreas realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información requerida.

En el caso particular, la unidad de transparencia turnó la solicitud a los servidores públicos habilitados de la Secretaría del Ayuntamiento, la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, y la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, entre cuyas funciones en materia de transparencia, según lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se encuentran las de localizar la información que le solicite la Unidad de Transparencia; proporcionar la información que obre en sus archivos y que les sea solicitada por la Unidad de Transparencia; y verificar, una vez analizado el contenido de la información, que no se encuentre en los supuestos de información clasificada.

Asimismo, es imprescindible mencionar que de conformidad con los artículos 195 y 196 del Bando Municipal de Zinacantepec, el Juzgado Cívico de Zinacantepec está adscrito a la Secretaría del Ayuntamiento, el cual tiene a su cargo la impartición de justicia cívica, definida en el artículo 4, fracción XI de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México, como el conjunto de procedimientos orientados a fomentar la cultura cívica y de la legalidad a fin de dar solución de forma pronta, transparente y expedita a conflictos cotidianos, que tiene como objetivo facilitar y mejorar la convivencia en una comunidad y evitar que los conflictos escalen a conductas delictivas o actos de violencia, asimismo se le confieren, entre otras atribuciones, las siguientes en su parte conducente:

- Conocer, calificar y sancionar las infracciones establecidas en el Presente Bando Municipal; en los Reglamentos Municipales de Justicia Cívica y demás disposiciones legales aplicables.

- Llevar a cabo audiencias públicas para resolver sobre la responsabilidad de los probables infractores.

- Fomentar y proponer la solución pacífica de conflictos entre particulares, a través de mecanismos alternativos de solución de controversias como la mediación, la conciliación o la justicia restaurativa.

- Expedir recibo oficial a la persona infractora para que ésta realice el pago de la multa impuesta, ante la Tesorería Municipal.

- Coadyuvar, en el ámbito de su competencia, con el Ministerio Público y las autoridades judiciales correspondientes.

- Remitir al Ministerio Público a las personas que sean presentadas como probables infractoras, cuando los hechos constituyan la comisión de un probable delito.

- Conocer, calificar e imponer las sanciones que proceden por las infracciones que deriven con motivo de la aplicación del Libro Octavo del Código Administrativo del Estado de México en el ámbito de competencia municipal correspondiente, excepto las de carácter fiscal y se apegará a los procedimientos establecidos en el mismo.

Por otro lado, de conformidad con los artículos 164 y 165 del Bando Municipal de Zinacantepec, el Cuerpo de Tránsito es la autoridad municipal facultada para regular y planear el tránsito de peatones y vehículos en las vías públicas del municipio con el objeto de garantizar al máximo la seguridad de las personas, el medio ambiente y el orden público, cuyas atribuciones se encuentran contenidas en el mismo ordenamiento, en el **Reglamento de Tránsito del Estado de México** y las disposiciones normativas por las que se justifiquen las necesidades públicas, resultando de interés para el tema que nos ocupa, las siguientes:

- Detener y remitir a disposición del Ministerio Público, a los conductores de vehículos que presumiblemente manejen en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas enervantes o a los que hubiesen cometido hechos configurativos de delito;

- En los accidentes de tránsito en los que únicamente se produzcan daños materiales a los vehículos, los agentes tendrán la obligación de exhortar a los afectados, a fin de que lleguen a un arreglo inmediato para evitar el entorpecimiento de la circulación. En caso de que las partes no acepten tal sugerencia, deberán remitirlos a la autoridad competente para los efectos de la intervención legal respectiva. En todo caso, el agente de tránsito levantará la infracción correspondiente.

Mientras que la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, según lo dispuesto en los artículos 58 y 59 del Reglamento Orgánico Municipal y el numeral 1.6 del Manual General de Organización**,** es la dependencia encargada de planear, regular, gestionar y fomentar la movilidad de las personas en el municipio, entre cuyas atribuciones se encuentran las siguientes:

- Establecer las bases y directrices para la planeación, regulación y gestión de movilidad urbana para las personas y bienes de dominio público dentro de la zona territorial del Municipio.

**- Otorgar el Visto Bueno**, previo cumplimiento de requisitos para la autorización **de base, sitio o lanzadera, en la modalidad del servicio discrecional de automóvil de alquiler (taxi).**

Atento a lo anterior se colige que la Unidad de Transparencia turnó la solicitud de información a las unidades administrativas competentes para conocer la información que es del interés de la persona solicitante.

Dicho esto, se procede a contextualizar la información requerida en los puntos de la solicitud combatidos.

Respecto al **punto 2**, donde se requirió la cantidad y tipos de accidentes vehiculares ocurridos en la Avenida Adolfo López Mateos 1046, Carretera Almoloya de Juárez y López Mateos, San Luis Mextepec, del 01 de enero al 11 de julio de 2024, en primer lugar, es oportuno mencionar en primer lugar, que la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, a través de los Cuerpos de Tránsito, agentes de tránsito o policías de tránsito, se encarga de regular, vigilar, controlar y hacer cumplir las normas de tránsito y transporte, teniendo a su cargo, de conformidad con los artículos 14, fracciones II y III del Reglamento de Tránsito del Estado de México, y 165, fracciones III y IV del Bando Municipal de Zinacantepec, las siguientes atribuciones:

*“****Artículo 14****. En el ejercicio de sus funciones, los agentes de tránsito del Estado están facultades para:*

***…***

***III.******Detener y remitir a disposición del Ministerio Público, a los conductores de vehículos que presumiblemente manejen en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas enervantes*** *o* ***a los que hubiesen cometido hechos configurativos de delito:***

***IV****. En los accidentes de tránsito en los que únicamente se produzcan daños materiales a los vehículos, los agentes tendrán la obligación de exhortar a los afectados, a fin de que lleguen a un arreglo inmediato para evitar el entorpecimiento de la circulación. En caso de que las partes no acepten tal sugerencia, deberán remitirlos a la autoridad competente para los efectos de la intervención legal respectiva. En todo caso, el agente de tránsito levantará la infracción correspondiente;”*

***“Artículo 165****. Para la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas referentes a este Capítulo,* ***el Ayuntamiento cuenta con su respectivo Cuerpo de Transito,*** *teniendo las siguientes facultades*:

*…*

***III.******Detener y remitir a disposición del Ministerio Público,*** *a los conductores de vehículos que presumiblemente manejen en estado de ebriedad o bajo efecto de drogas enervantes* ***o a los que hubiesen cometido hechos configurativos de delito****;*

***IV****.* ***En los accidentes de tránsito en los que únicamente se produzcan daños materiales a los vehículos****, los agentes* ***tendrán la obligación de exhortar a los afectados****, a fin* ***de que lleguen a un arreglo inmediato*** *para evitar el entorpecimiento de la circulación.* ***En caso de que las partes no acepten tal sugerencia, deberán remitirlos a la autoridad competente para los efectos de la intervención legal respectiva****. En todo caso, el agente de tránsito* ***levantará la infracción correspondiente****;”*

Asimismo, es oportuno traer a colación, de manera enunciativa, más no limitativa, el contenido de los artículos 117 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, 192, párrafo segundo de la Ley de Seguridad del Estado de México, 30, párrafo cuarto, 60, párrafos segundo y tercero, 61, 237, párrafos tercero y cuarto, y 308 del Código Penal del Estado de México, a saber:

***“Artículo 117****.- Se impedirá la circulación de cualquier vehículo,* ***poniéndolo de inmediato junto con su conductor a disposición del Ministerio Público****,* ***cuando como consecuencia de un accidente de tránsito se hubieren causado lesiones, homicidio, o se incurriera en la comisión de cualquier otro delito****.”*

***“Artículo 192.-***

*Quedarán* ***exceptuados de la mediación policial****, los* ***homicidios culposos producidos en accidentes de tránsito bajo el influjo de sustancias que alteren la capacidad de conducir vehículos o con motivo de la conducción de vehículo de motor de transporte público****,* ***cuando se ocasionen lesiones que pongan en peligro la vida a más de tres personas o se cause la muerte de dos o más personas****.”*

***“Artículo 30.-***

*…*

*Tratándose* ***de lesiones y homicidio cometidos por la conducción de vehículos de transporte público de pasajeros, vehículos oficiales, de personal, escolar en servicio u otro que sin contar con la autorización oficial preste un servicio equivalente****, y a falta de pruebas específicas respecto al daño causado, los jueces tomarán como base la tabulación de indemnizaciones que fija la Ley Federal del Trabajo y el salario mínimo general más alto del Estado.*

*…*

***…***

***Artículo 60.-***

*…*

***Cuando el delito se cometa con motivo de la conducción de vehículos automotores y el imputado se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, enervantes y otras análogas que produzcan efectos similares****, además de la pena señalada, se le impondrán de seis meses a un año de prisión, de treinta a cien días multa, y suspensión por un año o privación del derecho de manejar.*

***Si el delito se comete por conductores de vehículos de transporte público de pasajeros, de personal o escolar en servicio, y el imputado se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas enervantes y otras análogas que produzcan efectos similares****, siempre que no se cause homicidio, además de la pena señalada, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de treinta a doscientos días multa y suspensión por un año o privación definitiva del derecho de manejar en caso de reincidencia.*

***Artículo 61.-******Si el delito culposo se comete con motivo de la conducción de vehículo de motor de transporte público de pasajeros, de personal o escolar en servicio y se cause el homicidio de una ó más personas,*** *la pena será de tres a doce años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa y suspensión del derecho para conducir vehículos de motor de tres a doce años o privación definitiva de este derecho. En caso de reincidencia se le privará definitivamente de este derecho.*

*Se considerará como grave cuando en la comisión de este delito el conductor incurra en cualquiera de las siguientes circunstancias:*

***I.*** *Se encuentre en estado de ebriedad;*

***II.*** *Se encuentre bajo el influjo de drogas, enervantes o psicotrópicos; III. Abandone a la víctima o no le preste auxilio;*

***IV****. Derogada*

***V****. Cause lesiones a más de tres personas, de las que pongan en peligro la vida o se cause la muerte de dos o más personas.*

***Cuando por manejar en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas, enervantes y otras análogas que produzcan efectos similares*** *se maneje un vehículo de motor, además de la pena por el delito cometido, se le impondrán de seis meses a un año de prisión, de treinta a cien días multa, y suspensión por un año o privación del derecho de manejar.* ***Si el delito se comete por conductores de vehículos de transporte público de pasajeros, de personal o escolar en servicio, siempre que no se cause homicidio, además de la pena por el delito cometido****, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de treinta a doscientos días multa y suspensión por un año o privación definitiva del derecho de manejar en caso de reincidencia.*

***…***

***Artículo 237****.- El delito de lesiones se sancionará en los siguientes términos:*

*…*

***El Ministerio Público se abstendrá de ejercer acción penal, tratándose de lesiones culposas de las que según la clasificación médica tarden en sanar menos de quince días****,* ***causadas con motivo de accidentes ocasionados por el tránsito de vehículos****. En estos casos,* ***la autoridad que conozca de los hechos remitirá el asunto a la instancia conciliadora establecida en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México****,* ***siempre y cuando el conductor que ocasione el hecho de tránsito no se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.***

*En los casos de lesiones causadas con motivo de accidentes ocasionados por el tránsito de vehículos, distintas a las señaladas en el párrafo anterior, el Ministerio Público podrá aplicar los criterios de oportunidad, dependiendo de las particularidades de cada caso, en términos de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales.*

*Las diligencias practicadas por la autoridad que conozca de los hechos en primer orden, serán turnadas a la autoridad que le corresponda, para que siga conociendo de los hechos.*

***…***

***Artículo 309.-*** *Comete este delito el que por cualquier medio dañe, destruya o deteriore un bien ajeno o propio en perjuicio de otro.*

***El Ministerio Público se abstendrá de ejercer acción penal tratándose de daño en bienes muebles o inmuebles de propiedad privada****,* ***causado por accidentes ocasionados con motivo del tránsito de vehículos.*** *En estos casos,* ***la autoridad que conozca de los hechos remitirá el asunto a la instancia conciliadora establecida en la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, siempre y cuando el conductor que ocasione el hecho de tránsito no se encuentre en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas.***

***Si como resultado de un accidente de tránsito se ocasionan daños en bienes de la administración pública municipal o estatal****, el* ***Ministerio Público podrá aplicar los criterios de oportunidad*** *en términos de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales.*

*Las diligencias practicadas por la autoridad que conozca de los hechos en primer orden, serán turnadas a la autoridad que le corresponda, para que siga conociendo de los hechos.”*

De los preceptos en cita se deprende que los agentes de tránsito –entre ellos el Cuerpo de Transito de Zinacantepec-, cuentan con la obligación de:

- **Remitir al Ministerio Público** a los conductores involucrados en accidentes de tránsito de vehículos de transporte Público de Pasajeros, se encuentren en estado de ebriedad, bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, así como aquellos casos en los que se configure un delito, como lo son los delitos de homicidio, lesiones, daño a bienes, entre otros.

Sin embargo, en el caso de lesiones culposas tarden en sanar menos de quince días, así como el daño a bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, el **Ministerio Público se abstendrá de ejercer la acción penal,** en cuyo caso, la autoridad que conozca del hecho, debe remitir el asunto a la instancia conciliadora municipal, es decir, el Juzgado Cívico.

- **Remitir al Juzgado Cívico** a las personas implicadas en aquellos casos en donde habiendo únicamente daños materiales en los vehículos, lesiones culposas tarden en sanar menos de quince días, y/o daño a bienes muebles e inmuebles de propiedad privada, no llegaren a un arreglo inmediato derivado de la mediación policial que brinde, debiendo en todo caso, deben levantar la infracción correspondiente.

Respecto al Juzgado Cívico, es imprescindible mencionar que este se instauró derivado de la implementación paulatina del Modelo Homologado de Justicia Cívica, elaborado por la Comisión Nacional de Seguridad y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que culminó con la expedición de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios, así como con la reforma y derogación de diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y del Código Administrativo del Estado de México, el veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, destacando para el tema que nos ocupa que mediante dicho Decreto, se derogó el CAPÍTULO PRIMERO del TÍTULO V y los artículos 148, 149, 150, 151, 152 y 153, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, relativo a las Oficialías Mediadora-Conciliadoras y de las Oficialías Calificadoras municipales.

En este tenor, las Oficialías Mediadora-Conciliadoras y Calificadoras de Zinacantepec, entre las que se encontraba la Oficialía Calificadora de Hechos de Tránsito Terrestre, se constituyeron en el Juzgado Cívico a partir del ejerció 2024, como se desprende del artículo 161 del Bando Municipal de Zinacantepec de los ejercicios 2023 y 2024, a saber:

|  |  |
| --- | --- |
| **Bando Municipal, 2023** | **Bando Municipal, 2024** |
| **Artículo 161**. El Ayuntamiento, **a través de la Oficialía Calificadora de Hechos de Tránsito Terrestre**, tendrá la responsabilidad de conocer o ser árbitro en los accidentes ocasionados con motivo del tránsito vehicular, **cuando exista conflicto de interés**, siempre que se trate de daños materiales a propiedad privada y en su caso lesiones. | **Artículo 161**. El Ayuntamiento, a **través del Juez Cívico**, tendrá la responsabilidad de conocer o ser árbitro en los accidentes ocasionados con motivo del tránsito vehicular, **cuando exista conflicto de interés**, siempre que se trate de daños materiales a propiedad privada y en su caso, lesiones previstas en el artículo 237 del Código Penal del Estado de México. |

No obsta mencionar que en el 1er y 2do Informe de Resultados de la Administración Pública Municipal de Zinacantepec 2022-2024, se localizó la siguiente información:

|  |  |
| --- | --- |
| **1er Informe** | **2do Informe** |
|  |  |

Una vez establecido lo anterior, es oportuno puntualizar que NO todos los accidentes de tránsito requieren la intervención de la policía o agentes de tránsito, ya que en el caso de los percances simples donde sólo se causen daños materiales y resultaren afectados vehículos asegurados, no asegurados, muebles o inmuebles de propiedad privada, entre otros supuestos, son las personas involucradas quienes proceden a la solución del conflicto respecto a la reparación del daño, en cuyo caso, no es posible que la autoridad no tenga conocimiento de dichos sucesos.

Sin embargo, en aquellos casos que son del conocimiento de la policía, oficiales o agentes de tránsito, en principio se debe ponderar si el hecho pudiera probablemente constituir un delito, y/o el conductor que ocasione el hecho de tránsito se encuentra en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o sustancias psicotrópicas, en cuyo caso, la autoridad que conoce del hecho, cuenta con el deber de remitir al Ministerio Público al o los probables responsables; por otro lado, en aquellos casos en los que solo se hubieran producido daños materiales ya sea en los vehículos, en bienes muebles o inmuebles de propiedad privada, así como lesiones que tarden en sanar menos de quince días, y las personas involucradas no llegaran a un acuerdo en el lugar de los hechos, la autoridad que conozca del hecho debe remitirles al Juzgado Cívico.

En congruencia con lo expuesto, no se deja lado que si bien, existen hechos que por su naturaleza requieren la intervención de agentes de tránsito y/o elementos policiales, y que derivado de ello pudieran poner a disposición ante el Ministerio Público o el Juzgado Cívico a los probables responsables, así como objetos, situación que debe ser documentada por parte de los elementos policiales, ya sea a través del parte de novedades, bitácora, o el documento análogo en el que se registren detalladamente los hechos, acontecimientos y novedades ocurridas durante su jornada laboral, el registro de infracciones levantadas, así como el Informe Policial Homologado y la boleta de remisión ante el Juzgado Cívico, documentos de los cuales pudiera desprenderse la información que es del interés de la persona solicitante, no debe perderse de vista que **no se solicitó el acceso a dichos documentos, sino información estadística específicamente de accidentes de tránsito ocurridos en una avenida en concreto.**

Ahora bien, derivado del análisis de la respuesta al requerimiento de información, proporcionada por los servidores públicos habilitados de las áreas competentes, esto es, de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, y el Secretario del Ayuntamiento como dependencia responsable de supervisar el funcionamiento de los Juzgados Cívicos, en términos del artículo 11, fracción II de la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus Municipios, este Organismo Garante concluye que no brinda certeza, ni agotó los principios de congruencia y exhaustividad enmarcados en el Criterio de interpretación, con clave de control SO/002/2017 emitido por el Peno del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, de rubro y texto siguientes:

***“Congruencia y exhaustividad. Sus alcances para garantizar el derecho de acceso a la información.*** *De conformidad con el artículo 3 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en términos de su artículo 7; todo acto administrativo debe cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad. Para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información,* ***la congruencia implica que exista concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado****; mientras que* ***la exhaustividad significa que dicha respuesta se refiera expresamente a cada uno de los puntos solicitados****. Por lo anterior, los sujetos obligados cumplirán con los principios de congruencia y exhaustividad, cuando las respuestas que emitan guarden una relación lógica con lo solicitado y atiendan de manera puntual y expresa, cada uno de los contenidos de información.”*

Lo anterior se afirma así en virtud de que de la lectura de la respuesta proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, como lo señaló la parte **Recurrente**, se advierte que mediante un documento que tiene el mismo número de oficio, emitidos en la misma fecha, argumentó dos cuestiones diversas para atenderé el requerimiento, ya que por un lado, alegó que no llevaba a cabo un conteo estadístico de accidentes vehiculares, y por otro, declinó la competencia en favor de Oficialía Calificadora de Hechos de Tránsito, hoy Juzgado Cívico, y por otro, situación que deja a la persona solicitante en estado de incertidumbre, sin perder de vista, además, que de acuerdo con el estudio realizado para la resolución del presente asunto, dicha dependencia si cuenta con atribuciones para conocer la información solicitada.

Por otro lado, la Secretaría del Ayuntamiento, si bien reconoció que de los accidentes atendidos por los oficiales de tránsito mensualmente, solo se presentaban al Juzgado Cívico un 10% en promedio, no se pronunció respecto de los casos que le fueron presentados, si alguno correspondía con accidentes de tránsito ocurridos en la vialidad señalada en la solicitud.

Con base en lo previo, con la finalidad de garantizar el derecho humano de acceso a la información de la parte **Recurrente,** y a fin de reparar el agravio causado ante la omisión en que incurriera el **Sujeto Obligado,** ya que como se señaló, su respuesta al punto en estudio careció de los principios de certeza, congruencia y exhaustividad, se estima dable ordenar la búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos de las áreas competentes del soporte documental que dé cuenta de la información solicitada, esto es, del número y tipo de accidentes vehiculares ocurridos en la avenida referida, del uno de enero al once de julio de dos mil veinticuatro, al mayor grado de desagregación posible, y se proceda a la entrega en versión pública de ser necesario de conformidad con el considerando siguiente.

No obstante, si derivado de la búsqueda que se ordena, no se llegara a localizar información por no obrar en sus archivos, al grado de detalle que se solicita bastará con que así se haga del conocimiento de la persona solicitante, para tener por colmado su derecho de acceso a la información, en términos de lo dispuesto por el artículo 19, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a saber:

*“****Artículo 19****…*

*En los casos en que ciertas facultades, competencias o funciones no se hayan ejercido, se debe motivar la respuesta en función de las causas que motiven tal circunstancia.”*

En tal supuesto, es improcedente la entrega de documento alguno, o en su caso, el Acuerdo de Inexistencia, toda vez que el pronunciamiento del **Sujeto Obligado** declararía en automática la inexistencia de la información solicitada, esto es, de un documento que dé cuenta específicamente del monto erogado por los conceptos referidos, de modo que no existe obligación de justificar o allegar pruebas, y por ende no tiene aplicación lo estatuido en el artículo 49, fracción XIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Lo anterior se estima así en virtud de que si, bien, como ha sido señalado, el **Sujeto Obligado** está constreñido a documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, y en consecuencia, la información estadística que es del interés de la persona solicitante pudiera encontrarse en los archivos del **Sujeto Obligado**, o en su defecto, pudiera estar contenida en diversos documentos, de manera enunciativa, más no limitativa, reportes, el parte de novedades, el registro de infracciones levantadas, así como el Informe Policial Homologado o la boleta de remisión ante el Juzgado Cívico, y en este supuesto, en caso de existir, al no haber fuente obligacional de llevar registro especifico de ello, es decir, de accidentes de tránsito, clasificados por calle, avenida o vialidad, sería necesario que el **Sujeto Obligado** realizara un procesamiento o una investigación en los archivos generados por los agentes de tránsito y/o elementos policiales de Dirección de Seguridad Pública y Tránsito, del uno de enero al once de julio de dos mil veinticuatro, a efecto de identificar aquellos los que se actualice el supuesto que la persona solicitante señala, específicamente en la avenida referida, y generar un documento ad hoc por medio del cual informe los hallazgos, para satisfacer el requerimiento en los términos que se solicita.

Y, si bien es cierto, de conformidad con el artículo 22, fracción V, de la Ley de Seguridad del Estado de México, la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito tiene con la obligación de contar con **estadísticas delictivas**, la normativa no establece de manera concreta las formalidades de los resultados cuantitativos que deben obtenerse, ni los criterios que deben tomarse en consideración o los datos que deben capturarse, siendo necesario precisar **que los hechos o accidentes de tránsito, por si mismos, no son considerados como delitos,** sino que **pudieran traer como consecuencia la configuración de un delito, como lesiones graves, homicidio, daño a los bienes, entre otros**; por lo tanto, se infiere que en caso de haber acontecido hechos relacionados con el supuesto referido en la solicitud específicamente en la avenida señalada, y que estos hubieran configurado algún delito, la información que formaría parte de la estadística delictiva, sería el hecho que se constituye como tal, esto es, el hecho tipificado como delito, lo que se traduce en la falta de fuente obligacional para llevar un registro de accidentes vehiculares al grado de detalle que se solicita.

Por otro lado, respecto al **punto 4,** mediante el cual se solicitó el protocolo o actividades que se han implementado para regular el correcto funcionamiento de la base de taxis que se encuentra en la Avenida Adolfo López Mateos 1046 Carretera Almoloya y López Mateos San Luis Mextepec, es oportuno traer a colación el contenido de los artículos 55 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México, 2, fracción XV, y 37 de la Ley de Movilidad del Estado de México, que es del tenor literal siguiente:

***“Artículo 55****. La* ***Secretaría de Movilidad*** *contará con las siguientes atribuciones:*

*…*

***XLI****.* ***Autorizar y modificar en todo tiempo*** *rutas, itinerarios, horarios, frecuencias, así como* ***bases, paraderos y terminales del servicio público de transporte*** *y señalar la forma de identificación de los vehículos afectos al servicio público de transporte;”*

***“Artículo 2****. Definiciones. Para la aplicación, interpretación y efectos de esta Ley, se entiende por:*

***…***

***XV.******Secretaría:*** *Secretaría de Movilidad.*

***…***

***Artículo 37.*** *El* ***servicio de taxi necesariamente deberá estar vinculado a bases, lanzaderas o sitios****,* ***autorizados por la Secretaria*** *con el visto bueno de los Municipios.”*

De los preceptos citados se desprende que la autorización y modificación de las bases, lanzaderas, o sitios de taxis **son autorizadas por la Secretaría de Movilidad**.

Dicha atribución le corresponde a la Dirección General del Registro Estatal de Transporte Público, a través de las Direcciones Generales de Movilidad Zonas I, II, III y IV, a las cuales se les confiere, entre otras atribuciones, la de **dictaminar respecto de la creación, modificación, enlace o cancelación de alargamientos, derroteros, enlaces, enrolamiento, bases, paraderos, frecuencias y horarios, previo acuerdo de la o del titular de la Subsecretaría de Movilidad,** según dispone el Manual General de Organización de la Secretaria de Movilidad.

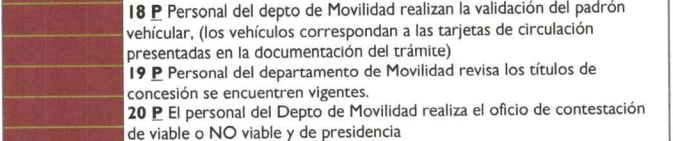
Ahora bien, respecto a la competencia del **Sujeto Obligado,** el mismo artículo 37 de la Ley de Movilidad dispone que les corresponde a los municipios emitir el visto bueno para la establecer la base, lanzadera, o sitio del que se trate, con relación al servicio de taxi.

Así, el visto bueno para establecer bases, sitios o lanzaderas en la modalidad de servicio discrecional de automóvil de alquiler (taxi), es un trámite que se realiza ante la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad del municipio, para lo cual, los interesados deben presentar, entre otros documentos, el **estudio técnico para la ubicación de la base expedida por la Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado de México,** asimismo, el criterios para resolver la procedencia del trámite se basa en la validación de la documentación solicitada por la titular de la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, que consiste en la inspección de la ubicación donde se pretende instalar la base, para verificar que no existan elementos que prohíban la instalación, la validación del padrón vehicular, es decir, que los vehículos correspondan con las tarjetas de circulación presentadas, la revisión de los títulos de concesión vigentes, como se desprende de la Cédula de Información del Registro Municipal de Trámites y Servicios disponible en la página oficial del **Sujeto Obligado:**

****

****

****

****

Con base en lo previo se colige que la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, no cuenta con atribuciones para elaborar protocolos o implementar actividades relacionadas con la regulación del correcto funcionamiento de bases de taxis, dado que su competencia se limita a la expedición del visto bueno para el establecimiento de dichas bases.

Es así que se arriba a la conclusión de que el pronunciamiento emitido por la servidora pública habilitad de la Dirección de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, es correcto, toda vez que Sujeto Obligado competente para atender el requerimiento de la persona solicitante, es la Secretaría de Movilidad, al ser esta, la dependencia responsable de autorizar y modificar las bases, lanzaderas o sitios de taxis.

Por consiguiente, en el presente asunto no es procedente la entrega de información alguna para atender la solicitud de información, bajo la premisa de que los Sujetos Obligados sólo deben proporcionar aquella información que hubieran generado en el ejercicio de sus atribuciones y que obre en sus archivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, lo que a *contrario sensu* significa que no se está obligado a proporcionar lo que no obre en sus archivos, en consecuencia, el pronunciamiento vertido por la Unidad de Transparencia, es suficiente para tener por atendidos los requerimientos de información.

Dicho lo anterior, es de recordar, respecto a la Declaración de Incompetencia, que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México, establece en los artículos 49, fracción II y 167, lo siguiente:

*“****Artículo 49.******Los Comités de Transparencia*** *tendrán las siguientes atribuciones:*

***...***

***II.*** ***Confirmar, modificar o revocar*** *las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información* ***y declaración*** *de inexistencia o* ***de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;***

***...***

***Artículo 167****.* ***Cuando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia*** *por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información,* ***deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud*** *y,* ***en su caso orientar al solicitante, el o los sujetos obligados competentes.” (Sic)***

De los preceptos citados se desprende que es atribución del Comité de Transparencia confirmar, modificar o revocar, en su caso, la declaración de incompetencia, **en aquellos casos en los que no se trate de una notoria incompetencia.**

Puesto que la Ley también prevé que dicho acuerdo no es necesario cuando la Unidad de Transparencia determine que la incompetencia es notoria dando un plazo de tres días hábiles para hacerlo del conocimiento de la persona solicitante. En otras palabras, la Ley de la Materia confiere a las Unidades de Transparencia la posibilidad de notificar la incompetencia cuando esta sea notoria, siendo innecesario que dicha circunstancia sea sometida a consideración de los integrantes del Comité de Transparencia para su aprobación.

Como sustento de lo anterior, resulta aplicable el Criterio de Interpretación con Clave ce control SO/002/2020, emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales, INAI, que lleva por rubro y texto los siguientes:

***“Declaración de incompetencia por parte del Comité, cuando no sea notoria o manifiesta.*** *Cuando la normatividad que prevé las atribuciones del sujeto obligado no sea clara en delimitar su competencia respecto a lo requerido por la persona solicitante y resulte necesario efectuar un análisis mayor para determinar la incompetencia, ésta debe ser declarada por el Comité de Transparencia.”*

De igual manera, el Pleno de este Instituto, a través del Criterio 02/04 emitido en la Segunda Época, precisa los alcances del artículo 167 de la Ley de Transparencia, al señalar que corresponde al Comité de Transparencia confirmar la declaratoria de incompetencia y notificarle dicha determinación al particular, refiriéndose a aquellos casos en los que exista **duda razonable sobre la administración del documento materia de la solicitud de información**, como se lee enseguida:

***“DECLARATORIA DE INCOMPETENCIA DEL SUJETO OBLIGADO. SUPUESTO PARA CONFIRMARLA POR ACUERDO DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA.*** *De conformidad con el artículo 167 de la Ley de Transparencia vigente en la entidad, las Unidades de Transparencia tienen la facultad de determinar la notoria incompetencia para atender las solicitudes de acceso a la información y comunicarla al solicitante dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la misma, así como en su caso, orientar al particular sobre el o los Sujetos Obligados competentes para su atención. No obstante, es importante resaltar que* ***al ejercer el derecho de acceso a la información pública cabe la posibilidad de que existan atribuciones concurrentes entre dos o más Sujetos Obligados que impiden determinar dentro del término legal de tres días hábiles, si se posee o no la información por el Sujeto Obligado requerid****o; en virtud de ello, en aras de disipar toda duda razonable sobre la administración del documento materia de la solicitud de información, el Sujeto Obligado deberá dar el trámite correspondiente a la solicitud de información a efecto de realizar un análisis minucioso de las facultades, competencias o funciones de cada una de las Unidades Administrativas que lo integran y, si posterior a ello, se corrobora la incompetencia para la atención del requerimiento, en razón de que es otro el Sujeto Obligado poseedor de la documentación, corresponde a su Comité de Transparencia confirmar la declaratoria de incompetencia y notificarle dicha determinación al particular, en términos de lo dispuesto en el artículo 49, fracción II de la Ley de Transparencia Local, al ser este el acto jurídico idóneo que genera seguridad jurídica de que el Ente ante quien se presentó la solicitud, carece de facultades, competencias o funciones para poseer o generar la información requerida; lo anterior, sin perjuicio de que pueda gestionar la colaboración de otro Sujeto Obligado competente para atender la solicitud.”*

En el caso particular, como ha quedado demostrado a lo largo del presente estudio, la incompetencia del Sujeto Obligado para atender lo solicitado es notoria, dado que sus funciones se limitan a la emisión del visto bueno, por lo tanto resulta innecesaria la emisión de una declaratoria formal de incompetencia a través del Comité de Transparencia.

Ahora bien, respecto de los argumentos vertidos por la parte **Recurrente** a través de su recurso de revisión, referentes al deber del **Sujeto Obligado** de realizar las gestiones necesarias para canalizar mi requerimiento a la Secretaría de Movilidad, es oportuno traer a colación el contenido del artículo 167 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a saber:

“***Artículo 167****. Cuando las unidades de transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información,* ***deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud*** *y,* ***en su caso orientar al solicitante, el o los sujetos obligados competentes.***

*Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.*

***Si transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo de este artículo****, el sujeto obligado* ***no declina la competencia*** *en los términos establecidos,* ***podrá canalizar la solicitud ante el sujeto obligado competente.”***

Del precepto citado se desprende que en aquellos casos en los que los Sujetos Obligados, por conducto de sus Unidades de Trasparencia adviertan una notoria incompetencia para atender las solicitudes, derivado de las competencias de los Sujetos Obligados, cuentan con el deber de hacer del conocimiento dicha circunstancia dentro del plazo de 3 días, los cuales se cuentan a partir del día hábil siguiente de la recepción de las solicitudes, sin embargo, la orientación a las personas solicitantes al Sujeto Obligado competente, **es potestativa,** al igual que el canalizar la solicitud ante el Sujeto Obligado competente, es decir, que dichas facultades, contrario a lo alegado por la parte **Recurrente, no son obligatorias, sino voluntarias, optativas, opcionales o discrecionales.**

En tales circunstancias, dado que el **Sujeto Obligado** informó de la notoria incompetencia para atender favorablemente la petición, y orientó en su respuesta a la persona solicitante a la Secretaría de Movilidad, como el Sujeto Obligado competente para generar, administrar o poseer la información que es de su interés; este Organismo Garante estima procedente dar por atendido el requerimiento en estudio.

No obstante, se dejan a salvo sus derechos, para que en caso de así considerarlo conveniente a sus intereses, pueda formular una solicitud ante el Sujeto Obligado competente, es decir, la Secretaría de Movilidad del Estado de México.

De lo hasta aquí expuesto, se concluye que los motivos de inconformidad de la parte **Recurrente** devienen parcialmente fundados, siendo procedente *Modificar* la respuesta proporcionada por el **Sujeto Obligado** en términos del artículo 186 fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**Quinto. Versión Pública.** Finalmente, debe señalarse que de ser el caso en que los documentos que vayan a ser entregados para dar cumplimiento a la presente resolución, contengan datos que deban ser clasificados, el **Sujeto Obligado** deberá hacer la elaboración de la versión pública de tales documentos a fin de satisfacer el derecho de acceso a la información pública de la parte **Recurrente,** sin menoscabo al derecho a la protección de los datos personales de terceros, que les identifiquen o les hagan identificables.

Lo anterior de conformidad con lo que señalan los artículos 3 fracciones IX, XX, XXI y XLV, 91, 132, 137 y 143, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios que establecen:

*“****Artículo 3****. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***IX. Datos personales****: La información concerniente a una persona, identificada o identificable según lo dispuesto por la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México;*

***XX. Información clasificada****: Aquella considerada por la presente Ley como reservada o confidencial;*

***XXI. Información confidencial:*** *Se considera como información confidencial los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos;*

***XLV. Versión pública:*** *Documento en el que se elimine, suprime o borra la información clasificada como reservada o confidencial para permitir su acceso.*

*…*

***Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.*

***Artículo 132.*** *La clasificación de la información se llevará a cabo en el momento en que:*

***I****. Se reciba una solicitud de acceso a la información;*

***II.*** *Se determine mediante resolución de autoridad competente; o*

***III.*** *Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en esta Ley.*

*…*

***Artículo 137.*** *Cuando un mismo medio, impreso o electrónico, contenga información pública y reservada o confidencial, la Unidad de Transparencia para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.*

***…***

***Artículo 143****. Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I.*** *Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;”*

Igualmente, lo establecido en los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, emitidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que tienen por objeto establecer los criterios con base en los cuales los sujetos obligados clasificarán como reservada o confidencial la información que posean, desclasificarán y generarán, en su caso, versiones públicas de expedientes o documentos que contengan partes o secciones clasificadas.

Cabe señalar que la entrega de documentos en su versión pública debe acompañarse necesariamente del Acuerdo del Comité de Transparencia que la sustente el cual debe estar debidamente fundado y motivado, en el que se expongan los fundamentos y razonamientos que llevaron al **Sujeto Obligado** a testar, suprimir o eliminar datos de dicho soporte documental, ya que no hacerlo, lo entregado no tendría un sustento jurídico ni resultaría ser una versión pública, sino más bien una documentación ilegible, incompleta o tachada; ya que el no justificar las causas o motivos por las que no se aprecian determinados datos -ya sea porque se testan o suprimen- deja al solicitante en estado de incertidumbre, al no conocer o comprender porque no aparecen en la documentación respectiva.

Respecto a las formalidades que deberá llevar el acuerdo de clasificación que deberá emitir el **Sujeto Obligado** a través de su Comité de Transparencia, los Lineamientos Quincuagésimo y Quincuagésimo primero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas señalan lo siguiente:

***“Quincuagésimo.*** *Los titulares de las áreas de los sujetos obligados podrán establecer sus propios modelos o formatos para la elaboración de versiones públicas de documentos o expedientes, siempre y cuando cumplan lo establecido en los presentes Lineamientos, así como en las correspondientes Leyes Generales.*

***Quincuagésimo primero.*** *Toda acta del Comité de Transparencia deberá contener:*

***I.*** *El número de sesión y fecha;*

***II****. El nombre del área que solicitó la clasificación de información;*

***III****. La fundamentación legal y motivación correspondiente;*

***IV****. La resolución o resoluciones aprobadas; y*

***V****. La rúbrica o firma digital de cada integrante del Comité de Transparencia.*

*Las resoluciones del Comité en las que se haya determinado confirmar o modificar la clasificación de información pública como reservada, deberán incluir, cuando menos:*

***I.*** *Los motivos y razonamientos que sustenten la confirmación o modificación de la prueba de daño;*

***II****. Descripción de las partes o secciones reservadas, en caso de clasificación parcial****;***

***III.*** *El periodo por el que mantendrá su clasificación y fecha de expiración; y*

***IV.*** *El nombre del titular y área encargada de realizar la versión pública del documento, en su caso.*

*En los casos en que se clasifique la información como reservada siempre se entregará o anexará la prueba de daño con la respuesta al solicitante.*

*En los casos de resoluciones del Comité de Transparencia en las que se confirme la clasificación de información confidencial solo se deberán de identificar los tipos de datos protegidos, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo.*

Asimismo, para la elaboración de las versiones públicas se deberán observar las formalidades establecidas en los Lineamientos Quincuagésimo segundo, Quincuagésimo cuarto, Quincuagésimo quinto, Quincuagésimo séptimo y Quincuagésimo octavo, que establecen lo siguiente:

*“****Quincuagésimo segundo****. Para la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información clasificada como reservada o confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán tomar las medidas pertinentes tendientes a asegurar que el espacio utilizado para testar la información no podrá ser empleado para la sobreposición de contenido distinto al autorizado por el Comité.*

*En el caso específico de la clasificación y elaboración de versiones públicas de documentos que contengan información confidencial, las áreas de los sujetos obligados deberán:*

***I.*** *Fijar la fecha en que se elaboró la versión pública y la fecha en la cual el Comité de Transparencia confirmó dicha versión;*

***II.*** *Señalar dentro del documento el tipo de información confidencial que fue testada en cada caso específico, de conformidad con el lineamiento trigésimo octavo; y*

***III.*** *Señalar las personas o instancias autorizadas a acceder a la información clasificada.*

*En los documentos de difusión electrónica, señalar en la primera hoja y en el nombre del archivo, que la versión pública corresponde a un documento que contiene información confidencial.”*

*…*

***Quincuagésimo cuarto.*** *Cuando el Comité de Transparencia confirme la clasificación de documentos reservados y/o confidenciales, sea total o parcialmente; se deberá anexar al expediente la resolución que determinó la clasificación o, en su defecto, identificar en la carátula del expediente del cual formen parte, la fecha y sesión del Comité de Transparencia en la que se confirmó dicha clasificación.*

***Quincuagésimo quinto.*** *Cada área del sujeto obligado podrá designar formalmente a una o más personas como responsables del testado, que sean encargadas de la adecuada elaboración o supervisión de las versiones públicas de los documentos o expedientes, verificando que cumplan con los requisitos señalados en las Leyes Generales, los presentes Lineamientos y demás normativa aplicable antes de su confirmación por el Comité de Transparencia.*

***...***

***Quincuagésimo séptimo****. Se considera, en principio, como información pública y no podrá omitirse de las versiones públicas la siguiente:*

***I****. La relativa a las Obligaciones de Transparencia que contempla el Título V de la Ley General y las demás disposiciones legales aplicables;*

***II.*** *El nombre de los integrantes de los sujetos obligados en los documentos, y sus firmas autógrafas o digitales, cuando sean utilizados en el ejercicio de las facultades conferidas para el desempeño del servicio público, y*

***III****. La información que documente decisiones y los actos de autoridad concluidos de los sujetos obligados, así como el ejercicio de las facultades o actividades de los servidores públicos, de manera que se pueda valorar el desempeño de los mismos.*

*Lo anterior, siempre y cuando no se acredite alguna causal de clasificación, prevista en las leyes o en los tratados internacionales suscritas por el Estado mexicano.*

***Quincuagésimo octavo****. Los sujetos obligados garantizarán que los sistemas o medios empleados para eliminar la información en las versiones públicas sean irreversibles, de tal forma que no permitan su recuperación o la visualización de la misma.”*

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo tercero, trigésimo cuarto y trigésimo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185 y 186 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**III. R E S U E L V E**

**Primero.** Resultan **parcialmente fundadas** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la parte **Recurrente** en el recurso de revisión **05169/INFOEM/IP/RR/2024**; por lo que, en términos del **Considerando** **Cuarto** de esta resolución, se **Modifica** la respuesta emitida por el **Sujeto Obligado.**

**Segundo.** Se **Ordena** al **Sujeto Obligado,** en términos de los **Considerandos** **Cuarto** y **Quinto** de esta resolución, haga entrega, vía SAIMEX, previa búsqueda exhaustiva y razonable, en versión pública de ser procedente, de lo siguiente:

1. El o los documentos donde conste el número y tipo de accidentes vehiculares, ocurridos en la ubicación precisada en la solicitud, del uno de enero al once de julio de dos mil veinticuatro, al mayor grado de desagregación posible.

*De ser necesarias las versiones públicas, se deberán proporcionar junto con el Acuerdo de Clasificación donde el Comité de Transparencia, confirme la eliminación de los datos clasificados como confidenciales, de conformidad con los artículos 49, fracciones II y VIII, 132, fracción II, 143, fracción I y 149 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios*.

*En el supuesto que la información ordenada no obre en los archivos del* ***Sujeto Obligado****, bastará con que así lo haga del conocimiento de la parte* ***Recurrente****, de manera fundada y motivada, en términos del artículo 19, párrafo segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, para tener por colmado el requerimiento de información.*

**Tercero. Notifíquese,** vía **SAIMEX**, al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado,** la presente resolución para que conforme a los artículos 186, último párrafo y 189, párrafo segundo y 194 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; dé cumplimiento a lo ordenado dentro del plazo de diez días hábiles, e informe a este Instituto en un plazo de tres días hábiles siguientes sobre el cumplimiento dado a la presente, y, se le apercibe que en caso de negarse a cumplir la presente resolución o hacerlo de manera parcial, se le impondrá una medida de apremio de conformidad con lo previsto en los artículos 198, 200, fracción III; 214, 215 y 216 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

De conformidad con el artículo 198 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de considerarlo procedente, el **Sujeto Obligado** de manera fundada y motivada, podrá solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de la presente resolución.

**Cuarto. Notifíquese,** vía **SAIMEX**, a la parte **Recurrente** la presente resolución, así como, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que le causa algún perjuicio podrá impugnarla vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA, Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA TRIGÉSIMA OCTAVA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.